Gobierno Regional Junín

O.R.H.
DOC. Nº 11215714
EXP. Nº 6353733

RESOLUCION SUB DIRECTORAL ADMINISTRATIVA

Nº 550 -2026-GR-JUNIN/ORAF/ORH

Huancayo, 02 NOV. 2026

EL SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

Expediente Administrativo Disciplinario N° 178-2026-GRJ-ORAF/ORH/STPAD, el Informe de Órgano Instructor Nº 81-2026-GRJUNIN/GGR, de 06 de octubre del 2026, emitidos al interior del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra de la servidora civil: **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** quien se desempeñó como Directora del Archivo Regional del Inversión del Gobierno Regional, Junín; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, desarrolla en su Título V el nuevo diseño del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el Sector Público, en cuanto a su vigencia, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la referida Ley Nº 30057 aprobado por Decreto Supremo Nº040-2014-PCM señala que: "El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente el procedimiento"; así, y estando a que el referido reglamento fue publicado el 13 de junio 2014, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador conforme a la Ley de Servicio Civil entró en vigencia a partir del 14 de setiembre de 2014; por lo que, corresponde accionar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento;

Que, el artículo 91 º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM (en adelante Reglamento de la Ley del Servicio Civil) expresa "La responsabilidad administrativa disciplinaria ... "; así mismo, el artículo 102º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil señala que "Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en el artículo 88º de la Ley Nº 30057- LSC(...)" y el artículo 115º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece que : "La. resolución del Órgano Sancionador, se pronuncia sobre las existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinario poniendo fin a la instancia, debiendo contener, al menos: (i) La referencia a la falta incurrida, la cual incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión su responsabilidad respecto de la falta que se estime cometida; (ii) La sanción impuesta; (iii) El plazo para impugnar; y, (iv) La autoridad que resuelve el " recurso de apelación";

Que, el artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, ha establecido los Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa de todas las entidades públicas, que garantizan a los administrados, un procedimiento administrativo legal, razonable y bajo el imperio del debido procedimiento, entre otros principios, por a tener en cuenta parte de la entidad;

I. DEL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Que, de los antecedentes y documentos, que dieron lugar al Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario" se encuentran 1) Con fecha 13.04.2026 se notifica a la procesada **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** el acto de apertura de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario. 2) Con fecha 06.10.2026, se termina la actividad probatoria con el Informe de Órgano Instructor N° 81-2026-GRJ/GR,3) Con fecha 07.10.2026 se notifica a la procesada **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** con la Carta N° 708-2026-GRJUNIN/ORAF/ORH, a través del cual se le remite el informe de Órgano Instructor N° 81-2026-GRJUNIN/GGR;

Que, de los actuados se observa que el Gerente General Regional, en calidad de Órgano Instructor del procedimiento administrativo disciplinario, notificó a la servidora civil: **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA,** la apertura del procedimiento administrativo disciplinario en su contra, el 13-04-2025, por la presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil, proponiendo una sanción administrativa de **SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES**, asimismo, se le otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles a efectos de que presente su descargo;

Que, la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** fue debidamente notificada conforme a la Constancia de Notificación de Resolución N° 278-2026-GRJ/SG, de fecha 13 de abril del 2026, en el cual la servidora civil presento su descargo dentro de la fecha que estipula la ley, siendo consignado en el Informe de Órgano Instructor N° 81-2026-GRJ/GGR;

Que, asimismo, se observa que el Órgano Instructor después de una evaluación de los documentos que obran en el expediente y habiendo hecho descargo de parte del servidor civil, mediante Informe de Órgano Instructor N° 81-2026-GRJUNIN/GGR de fecha 06-10-2026, recomienda la imposición de la sanción de suspensión si goce de remuneraciones por 02 días en contra de la servidora **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, por la presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93° de la Ley N° 30057, ley del Servicio Civil, en concordancia con los artículos 112° y 115° de su Reglamento General; una vez recibido el Informe del Órgano Instructor corresponde a este Órgano Sancionador comunicar a la servidora civil procesado sobre el contenido del mismo e informarle que en caso considere necesario, puede solicitar un informe oral; para que, finalmente se emita la resolución debidamente motivada que contenga el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo a fin a esta primera instancia administrativa, situaciones que se ha cumplido en el presente procedimiento disciplinario;

II. SOBRE EL DEBIDO PROCEDIMIENTO

Que, revisadas las etapas procesales surtidas dentro del presente procedimiento administrativo disciplinario, no se evidencia la configuración de causal de nulidad que vicie el procedimiento, debido a que la actuación en fase instructiva y en esta fase sancionadora, estuvo en todo momento enmarcada dentro de los referentes del debido proceso y del derecho a la defensa del exfuncionario, pues se ha seguido a cabalidad los parámetros de legalidad formales y sustanciales establecidos en la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva N° 02-2015-SERVIR GPGSC, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y modificatorias, así como, lo dispuesto en el TUO de la ley N° 27444-

Ley Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respectivamente;

III. SOBRE EL INFORME ORAL

Que, de los actuados se observa que la Gerencia General Regional, en su calidad de Órgano Instructor del presente procedimiento administrativo disciplinario, notificó a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** la Apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario en su contra, tal como se corrobora en el expediente administrativo, por la presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria, tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil; por lo tanto, habría incurrido en falta administrativa que señala "Las demás que señale la ley" Esto de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30057;

Que, asimismo, se observa que el Órgano Instructor, mediante Informe de Órgano Instructor Nº 81-2026-GRJUNIN/GGR del 06-10-2026, señala que la servidora **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín y atendiendo a la graduación de la sanción; recomienda imponer la sanción administrativa disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por dos días, de conformidad con el último párrafo del literal a) del artículo 106º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, en concordancia con el numeral 16.3 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, la fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe, donde el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder;

Que, en el marco del artículo 112° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, una vez que el órgano instructor presento su informe al órgano sancionador, se notificó a la procesada a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral; en el presente caso NO solicitaron el uso de la palabra a pesar de estar debidamente notificado. Sin embargo, presento de manera escrita mediante solicitud S/N de fecha 13 de octubre de 2026 de la siguiente manera:

DESCARGO PRESENTADO POR LA SERVIDORA CIVIL OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA de fecha 13 de octubre del 2026 mediante Solicitud S/N de la siguiente manera:

(...)

Que, el Abogado Jesús Gómez Solís, venia emitiendo opiniones y recomendaciones sobre solicitudes de instrumentos notariales que presentaban observaciones o controversias. En particular afirmo que la redacción de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR relativa al pedido de el criterio jurídico aplicable. Solicito que esta circunstancia sea contratada con la constancias de derivación, comunicaciones, informes y de ser necesario con el informe personal del abogado pues la coordinación especifica alegada no se documentada por si sola en el Reporte N° 003-2023.

El alcance probatorio del memorando sobre las funciones el abogado El Memorando N° 395-2023-GRJ/AR de 2 de noviembre del 2023 dirigido al abogado Jesús Gómez Solís, describe funciones de informes legales, absolución de consultas, revisión de proyectos jurídicos legales y verificación de solicitudes notariales. Debe leerse junto con el Reporte N° 003-2023-GRJ/AR-JGGS emitido el 19 de mayo del 2023, que acredita una intervención jurídica anterior del citado abogado. Se precisa que el memorando es posterior a la Carta N° 90-2023, de 20 de octubre por lo que la formalización de funciones no por sí mismo una asignación formal previa.

(...)

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 13 de octubre de 2026, la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEÓN ANTIPA**, en su condición de Directora de la Dirección Regional de Archivo Junín, formula sus argumentos de defensa respecto de los hechos que sustentan la presunta comisión de falta administrativa disciplinaria, señalando, principalmente, que el abogado Jesús Gómez Solís venía emitiendo opiniones y recomendaciones jurídicas respecto de solicitudes de expedición de instrumentos notariales que presentaban observaciones o controversias. En particular, sostiene que la elaboración de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR, de fecha 20 de octubre de 2023, habría estado vinculada con el criterio jurídico aplicable al caso concreto, solicitando que dicha circunstancia sea contrastada con las constancias de derivación, comunicaciones, informes y, de ser necesario, con la declaración del referido profesional. Asimismo, invoca el Memorando N.° 395-2023-GRJ/AR, de fecha 2 de noviembre de 2023, y el Reporte N.° 003-2023-GRJ/AR-JGGS, de fecha 19 de mayo de 2023, a efectos de sustentar la intervención del citado abogado en asuntos de naturaleza jurídica relacionados con la atención de solicitudes notariales;

Sobre la intervención del abogado Jesús Gómez Solís en la evaluación de solicitudes notariales. Que, respecto al argumento de defensa referido a la intervención del abogado Jesús Gómez Solís en la emisión de opiniones y recomendaciones jurídicas, corresponde señalar que dicho argumento resulta relevante para el esclarecimiento de los hechos, en tanto permite identificar la posible participación de otros servidores o profesionales en la evaluación jurídica que precedió a la emisión de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR. Sin embargo, la sola alegación de que el referido abogado brindaba asesoramiento jurídico no constituye, por sí misma, un elemento suficiente para excluir la eventual responsabilidad administrativa disciplinaria de la investigada, toda vez que resulta necesario determinar si existió una intervención concreta, efectiva y vinculada con el contenido de la comunicación cuestionada;

Que, en ese sentido la valoración de este argumento debe efectuarse atendiendo a las funciones que cada interviniente habría desempeñado, las actuaciones documentadas en el expediente y la relación causal entre dichas actuaciones y el hecho materia de imputación. Por consiguiente, si bien la participación del abogado podría incidir en la determinación del grado de intervención y responsabilidad individual de los involucrados, no resulta jurídicamente válido concluir, únicamente sobre esa base, que la servidora investigada se encontraba exenta de responsabilidad por la decisión exteriorizada mediante la carta que suscribió en ejercicio de su cargo.

Que, sobre el alcance probatorio del Memorando N° 395-2023-GRJ/AR. Que, de la revisión de los argumentos expuestos en el descargo, se advierte que la investigada invoca el Memorando N° 395-2023-GRJ/AR, de fecha 2 de noviembre de 2023, mediante el cual se habrían descrito funciones vinculadas con la elaboración de informes legales, absolución de consultas, revisión de proyectos jurídicos y verificación de solicitudes notariales. Al respecto, corresponde precisar que dicho documento es posterior a la emisión de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR, de fecha 20 de octubre de 2023, circunstancia que limita su eficacia probatoria para acreditar, por sí solo, que el abogado Jesús Gómez Solís tenía una asignación formal y específica para intervenir en la evaluación de la solicitud que dio origen al presente procedimiento;

En efecto, la formalización documental de determinadas funciones con posterioridad al acto cuestionado no permite establecer automáticamente que tales funciones se encontraban previamente asignadas en los mismos términos, ni que el abogado hubiera emitido una opinión legal concreta sobre el caso materia de análisis. No obstante, tampoco corresponde descartar de plano la posible existencia de una intervención jurídica anterior, puesto que esta podría acreditarse mediante otros elementos probatorios, tales como el Reporte N° 003-2023-GRJ/AR-JGGS, de fecha 19

de mayo de 2023, las constancias de derivación, los documentos de trabajo, las comunicaciones institucionales u otros antecedentes contemporáneos a los hechos;

Por tanto, el Memorando N° 395-2023-GRJ/AR constituye un elemento que debe ser valorado en conjunto con los demás actuados, sin atribuirle un alcance probatorio mayor al que objetivamente posee. En consecuencia, el argumento de defensa no desvirtúa, por sí mismo, la imputación formulada contra la investigada; sin embargo, sí plantea la necesidad de esclarecer si existió una intervención jurídica previa y específica que pudiera incidir en la determinación de la responsabilidad individual.

Sobre el Reporte N° 003-2023-GRJ/AR-JGGS y la alegada intervención jurídica previa. Que, respecto del Reporte N° 003-2023-GRJ/AR-JGGS, de fecha 19 de mayo de 2023, invocado por la investigada, corresponde señalar que su existencia podría constituir un indicio de que el abogado Jesús Gómez Solís desarrollaba actividades relacionadas con la evaluación o asesoramiento jurídico de solicitudes vinculadas con instrumentos notariales. Sin embargo, para atribuirle eficacia exculpatoria respecto de los hechos imputados, resulta indispensable verificar su contenido íntegro, la naturaleza de las actuaciones descritas y su vinculación específica con la solicitud presentada el 2 de octubre de 2023 y con la posterior emisión de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR;

En tal sentido, la existencia de antecedentes de intervención jurídica en otros asuntos no acredita necesariamente que el referido abogado hubiera evaluado el caso concreto, formulado la exigencia de consentimiento del titular actual o recomendado sustentar la respuesta en los artículos 1478 y 1483 del Código Civil de 1936. Para arribar a tales conclusiones se requiere la existencia de elementos objetivos que permitan establecer esa conexión;

Por consiguiente, este extremo del descargo no desvirtúa la materialidad del hecho consistente en la emisión de la Carta N.° 90-2023-GRJ/AR ni acredita, por sí solo, que la decisión adoptada hubiera sido consecuencia exclusiva de una recomendación jurídica de un tercero. Sin perjuicio de ello, la alegada intervención del abogado debe ser objeto de corroboración, a efectos de evitar una atribución de responsabilidad basada únicamente en la condición jerárquica de la investigada o en la sola suscripción del documento, sin examinar las circunstancias concretas de su actuación;

Que, de la valoración conjunta de los antecedentes y del descargo presentado por la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEÓN ANTIPA**, se advierte que sus argumentos no desvirtúan integralmente los hechos objetivos que sustentan la imputación, en particular, la emisión de la Carta N° 90-2023-GRJ/AR, de fecha 20 de octubre de 2023, mediante la cual se requirió al administrado acreditar el consentimiento del actual titular para acceder a la escritura pública solicitada, invocándose disposiciones del Código Civil de 1936 cuya pertinencia y aplicabilidad al supuesto concreto han sido cuestionadas en el informe de control;

Que, en cuanto a la alegada intervención del abogado Jesús Gómez Solís, se concluye que dicho argumento no resulta suficiente, por sí solo, para excluir la eventual responsabilidad administrativa disciplinaria de la investigada, toda vez que no se ha establecido, con los elementos descritos en el descargo, que el citado profesional hubiera emitido una opinión jurídica específica y determinante respecto de la solicitud materia de análisis. No obstante, dicha circunstancia conserva relevancia probatoria y debe ser corroborada para establecer la intervención efectiva de cada participante;

Que, respecto del Memorando N° 395-2023-GRJ/AR, de fecha 2 de noviembre de 2023, se advierte que su emisión posterior a la Carta N° 90-2023-GRJ/AR limita su eficacia para acreditar una asignación formal previa de funciones en relación con el caso concreto. Por su parte, el Reporte N° 003-2023-GRJ/AR-JGGS, de fecha 19 de mayo de 2023, deberá ser valorado atendiendo a su contenido y a su vinculación específica con los hechos investigados, sin atribuirle efectos exculpatorios que no se encuentren debidamente acreditados;

Que, en consecuencia, corresponde **DESESTIMAR PARCIALMENTE** los argumentos de defensa en cuanto pretenden excluir, por la sola intervención alegada de un asesor jurídico, toda posible responsabilidad de la investigada, sin perjuicio de reconocer que los documentos invocados plantean aspectos que requieren corroboración para una adecuada individualización de responsabilidades. La eventual intervención de un tercero no constituye, por sí misma, una causa automática de exoneración, pero tampoco puede ser ignorada al momento de valorar la conducta imputada y su grado de culpabilidad;

Que, con respecto al Informe de Órgano Instructor, que en el parte final de dicho informe, recomiendo la suspensión sin goce de remuneraciones por diez días, el Órgano Sancionador, luego se analizar los actuados del expediente N° 225-2026-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, conforme a lo dispuesto en el artículo 114°, último párrafo del Reglamento de la Ley, donde señala que ***"el órgano sancionador puede apartar de las recomendaciones del órgano instructor, siempre y cuando motive adecuadamente las razones que los sustentan***", considera que existe suficientes elementos para variar la sanción recomendada a una de menor gravosidad;

En atención al análisis efectuado sobre el expediente administrativo que contiene el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra de la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, este despacho procede a emitir pronunciamiento conforme a derecho, en estricto respeto a los principios que rigen el procedimiento administrativo disciplinario establecidos en la Ley N.º 30057 – *Ley del Servicio Civil*, su Reglamento aprobado por D.S. N.º 040-2014-PCM, así como las disposiciones contenidas en la Ley N.º 27444 – *Ley del Procedimiento Administrativo General*;

Que, seguido el debido procedimiento, se advierte que a través de la Carta N° 708-2026-GRJ/ORAF/ORH de fecha 07 de octubre del 2026, se notifica a la servidora civil: **JULIO CESAR MEZA CCANTO,** en su condición de Sub Gerente de Promoción de Inversiones del Gobierno Regional Junín, así como a la servidora **MARIANELA LIZ QUISPE SALAS** en su condición de Directora Regional **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, el Informe de Órgano Instructor N° 81-2026-GRJUNIN/GGR, con la finalidad de considerarlo necesario pueda solicitar hacer uso de la palabra;

En consecuencia, y en aplicación del principio de razonabilidad previsto en el artículo 248° del TUO de la LPAG, así como del artículo 94° de la Ley N° 30057, se recomienda la imposición de la sanción de **AMONESTACIÓN ESCRITA** a la referida servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, por constituir la medida proporcional al grado de responsabilidad acreditada;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con los artículos 112º y 115º de su Reglamento General; una vez recibido el Informe del Órgano Instructor, corresponde a este Órgano Sancionador comunicar al servidor civil sobre el contenido del mismo e informarle que, en caso considere necesario, puede solicitar un informe oral. Finalmente, se emitirá la resolución debidamente motivada que contendrá el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, poniendo fin a esta primera instancia administrativa, procedimientos que en el presente caso se ha cumplido;

Que, al respecto, se tiene que el procedimiento administrativo disciplinario se inició con fecha 13 de abril del 2026, por tanto, la potestad sancionadora, conforme a la normatividad de la materia, prescribirá al año de iniciado el PAD. En ese sentido, a efecto de cumplir con los plazos establecidos, se emite acto correspondiente;

Por lo que se procede a realizar la evaluación del expediente, medios probatorios, descargo y todos los documentos contenidos en el mismo para sustentar la presente decisión;

IV. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

Que, bajo este contexto, habiendo llevado un análisis minucioso de los documentos que obran en autos, debemos considerar que, en los procedimientos disciplinarios, como el que amerita el presente análisis, la responsabilidad del exfuncionario debe estar debidamente comprobada a través de pruebas idóneas, pertinentes y conducentes, cuya suma genere plena convicción de que se ha cometido una conducta reprochable disciplinariamente; por tanto, es deber de todo órgano decisor evaluar los medios probatorios que ha sustentado la imputación de falta disciplinaria al servidor imputado, a efectos de emitir el pronunciamiento estipulado en el literal b) del artículo 106° del Reglamento de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil;

Que, de la revisión del procedimiento administrativo disciplinario pendiente de resolver, se verifica que, según el acto de imputación de cargos, la conducta atribuida a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, es presuntamente el literal **q)** "**Las demás que señale la ley"**, ello conforme se tiene de los antecedentes e imputaciones ya señalados en la Resolución que determina el inicio del proceso disciplinario, cual fuera materia del descargo y como resultado se tuvo el Informe final de instrucción;

V. PRUEBA MATERIAL SUJETO A RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

Que resulta importante señalar que, para emitir el fallo sancionatorio se requiere que obre en el proceso prueba "que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del servidor procesado" en ese sentido corresponde analizar los medios probatorios que sustentaron la imputación de cargos contra el servidor, a efectos de determinar con certeza si el imputado ha incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el literal b) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil;

Que, sobre el particular del análisis del medio probatorio que sirven como sustento para la imputación de cargos al servidor procesado, se tiene, los actuados que obran en el expediente, y dieron lugar al Informe de Pre Calificación N° 178-2026-GRJ-ORAF/ORH/STPAD, así como también de la Resolución Gerencial General Regional N° 113-2026-GRJUNIN/GGR de fecha 10 de abril del 2026, los cuales dieron lugar a la presunta responsabilidad materia de procedimiento disciplinario y posterior sanción de corresponder;

VI. ANALISIS DEL CASO

Que, resulta importante precisar que es deber de todo órgano revestido de competencia para imponer o declarar la inexistencia de responsabilidad disciplinaria, en cautela del debido procedimiento administrativo disciplinario, resolver según el mérito de los actuados que obran en el expediente administrativo; en ese sentido, corresponde en esta fase analizar las imputaciones realizadas por el órgano instructor y los medios probatorios;

Que, revisadas las etapas procesales surtidas dentro del presente procedimiento administrativo disciplinario, no se evidencia la configuración de causal de nulidad que vicie el procedimiento, debido a que la actuación en fase instructiva y en esta fase

sancionadora, estuvo en todo momento enmarcada dentro de los referentes del debido proceso y del derecho a la defensa de la servidora imputada, pues se ha seguido a cabalidad los parámetros de legalidad formales y sustanciales establecidos en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y sus modificatorias, así como lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, respectivamente;

Que igualmente, se observa que las notificaciones de las actuaciones surtidas en las fases instructiva y sancionadora hasta este momento se han realizado conforme al procedimiento, garantizando así el derecho de defensa de la servidora imputada. Además, se ha asegurado la prevalencia de los derechos fundamentales con observancia plena de las garantías propias del proceso disciplinario. Por lo tanto, se procede a emitir la resolución de primera instancia asegurando que el proceso disciplinario no está afectado por vicio procedimental alguno;

Que, en este contexto habiendo llevado un análisis minucioso de los documentos presentes en el expediente, es necesario considerar que en procedimientos disciplinarios como el que se está evaluando, la responsabilidad del servidor debe estar debidamente comprobada mediante pruebas idóneas, pertinentes y conducentes. Estas pruebas deben generar plena convicción de que se ha cometido una conducta disciplinariamente reprochable. Por ende, corresponde a todo órgano decisor evaluar los medios probatorios que respaldan la imputación de la falta disciplinaria a la servidora imputada, con el fin de emitir el pronunciamiento establecido en el literal b) del artículo 106° del Reglamento de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil;

Que, además, para emitir fallo sancionatorio, se requiere que obre en el proceso prueba "que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del servidor civil acusado". En ese sentido, corresponde analizar los medios probatorios que sustentaron las imputaciones de cargos contra la servidora imputada, a efectos de determinar con certeza si la acusada ha incurrido en la falta disciplinaria tipificada en literal b) del Art. 85° de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil;

Que, por lo tanto, este Órgano Sancionador debe manifestar que, en el desarrollo del procedimiento administrativo, en virtud del principio de verdad material, la carga de la prueba recae básicamente en la Administración Pública, dado que ésta asume un rol decisorio de los casos, más aún si se tratan de asuntos relacionados a la determinación de responsabilidad administrativa disciplinaria que podría recortar algunos derechos de los servidores públicos. Sobre la base de lo expuesto, se desprende que la Entidad ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario a la servidora imputada a razón de que, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, se ha logrado demostrar la responsabilidad de la servidora, dado que existe prueba razonable que acrediten la comisión de la falta y, en consecuencia, sustente con certeza la falta imputada tipificada en el literal b) del art. 85º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil;

VII. GRADUACION DE LA SANCION

Que, en relación a la posible sanción, es preciso mencionar que el artículo 90º de la Ley del Servicio Civil señala lo siguiente: "La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesto por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobado por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.";

Que, para la determinación de la sanción a imponerse, se debe considerar los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, los mismos que constituyen un límite a la potestad sancionadora del empleador, estando a que garantiza que la medida disciplinaria a imponerse al servidor guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la Entidad, al momento de considerar la sanción, debe valorar elementos como la gravedad de la falta, antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado u otros;

Que, en el presente caso es necesario tener en consideración el **Principio de presunción de licitud,** la misma que está prevista de manera expresa en el inciso 9 del art. 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos;

Artículo 248. – Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...) 9. **Presunción de licitud.** – Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

De modo que las autoridades del PAD deben presumir que los servidores o ex servidores civiles han actuado conforme a sus deberes, en tanto no cuente con evidencias que demuestren lo contrario. Respecto a la potestad disciplinaria de la administración pública se debe señalar que existen principios constitucionales del ius puniendi del Estado que son aplicables en materia disciplinaria, los mismos que establecen límites al ejercicio del mismo; y, en consecuencia, establecen garantías para los presuntos infractores;

Por su parte, el TSC ha establecido lo siguiente;

(...) toda persona tiene derecho a la presunción de su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, Es decir, ninguna personal puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que generen convicción sobre la responsabilidad que se le atribuye; por lo que no puede ser sancionado sobre la base de meros indicios, presunciones o sospechas (...).

En relación a los alcances de dicho principio, Morón Urbina señala lo siguiente:

(...) cubre al imputado durante el procedimiento sancionador, y se desvanece o confirma gradualmente, a medida que la actividad probatoria se va desarrollando, para finalmente definirse mediante el acto administrativo final del procedimiento. La presunción solo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente sobre los hechos y su autoría, tener seguridad que se han producido todos los elementos integrantes del tipo previsto, y un razonamiento lógico suficiente que articule todos esos elementos formando convicción.

En tal sentido, una fase instructiva adecuada e integral, a cargo del órgano instructor, será la que permitirá demostrar si es que dicha relativización, a través de la atribución de una presunta comisión de falta disciplinaria, estuvo o no correctamente efectuada. A efectos de establecer si la presunción de licitud se ve reforzada o desvirtuada, será indispensable contar y evaluar los elementos de convicción obtenidos por la Secretaría Técnica – PAD, durante la investigación preliminar;

Que, se les atribuye responsabilidad, a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, por la presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil Estado "Las demás que señale la ley";

Que, bajo dicho contexto, para la determinación de la sanción a imponerse, conforme a lo previsto en el artículo 103^{0} del Reglamento General, se deberá considerar si el servidor se encuentra inmerso dentro de los supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria, previsto en el artículo 104^{0} de la referida

norma, verificándose que; conforme a lo revidado en autos en el presente caso no se ha configurado ningún supuesto de exención de responsabilidad administrativa;

Que, la gradualidad de las sanciones en ejercicio de la potestad sancionadora de toda entidad pública, se destaca por su carácter discrecional o subjetivo, lo cual de ninguna forma supone arbitrariedad; dicho de otro modo, la gradualidad de la sanción en ejercicio de la potestad sancionadora se ejerce bajo márgenes de razonabilidad. A propósito de ello, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 2192-2004-AA/TC, señala que el principio de razonabilidad sugiere una valoración del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, y el principio de proporcionalidad sería el procedimiento para llegar a ese resultado, con tres sub principios como son de adecuación, de necesidad y de ponderación;

Que, en atención a lo señalado precedentemente, se aprecia en autos que el servidor ha presentado su descargo dentro del plazo legal establecido el cual se tuvo en cuenta en el Informe de Órgano Instructor que forma parte de presente expediente;

Que, en lo concerniente a la graduación de la sanción, corresponde la aplicación de los criterios que estipulan los artículos 87° y 91 ° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, a efectos de determinar que la sanción a imponerse se encuentra acorde a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad;

Que, adicionalmente, el artículo 91° de la Ley N° 30057, establece que para la graduación de la sanción se debe contemplar la naturaleza de la infracción y los antecedentes del servidor[1]. En cuanto a la naturaleza de la infracción, es evidente en el caso de autos que la ausencia injustificada a laborar por más de tres días, reviste una especial gravedad irreparable a la administración de justicia; sin embargo, la infracción cometida no ha sido continuada;

Que, por lo expuesto y en atención a lo señalado por el artículo 87° de la Ley del Servicio Civil; el inciso b) del artículo 106° del Reglamento de la Ley SERVIR - aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y, el numeral 17 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - aprobado por RPE N° 101-2015-SERVIR-PE; siendo así este **Órgano Sancionador recomienda imponer AMONESTACION ESCRITA a la servidora civil OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín;**

Que, en consecuencia, en aplicación de los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, presunción de licitud y razonabilidad, **El órgano sancionador se aparta de las recomendaciones del órgano instructor, (...) en concordancia al Artículo 114° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil DECRETO SUPREMO N° 040-2014-PCM, motivando adecuadamente su decisión de apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, conforme a lo previsto en el artículo 114° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;**

Que, de esta manera, la norma en mención exige que la sanción a imponer necesariamente guarde proporcionalidad con la falta imputada. Para tal efecto, en el

artículo 87° de la misma norma se precisan las condiciones que deben evaluarse para determinar la sanción a imponer;

Que, la razón de establecer parámetros claros para la determinación de una sanción, como los indicados en el referido artículo 87° se vincula con el reconocimiento del principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los poderes públicos cometer actos carentes de razonabilidad, que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó que "Al reconocerse en los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo";

En ese sentido, el órgano sancionador en atención a las imputaciones descritas, considera imponer una sanción más razonable;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117°, 118° y 119° del Reglamento General de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, contra la presente resolución procede la presentación del recurso impugnativo pertinente, el mismo que deberá ser presentado ante este despacho dentro del plazo de quince días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución Sub Directoral Administrativa;

Que, de presentar recurso de apelación, este deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado con el Decreto Supremo N° 008-2010-PCM y modificado con el Decreto Supremo N° 135-2013-PCM, y por la segunda disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; asimismo, deberá ser acompañado del Formato N° 1, conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2017- S1=RVIR/TSC "Disposiciones para el uso del Sistema de Casilla Electrónica del Tribunal del Servicio Civil", aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 085-2017-SERVIR/PE, en concordancia con el artículo 25° del mencionado reglamento;

VIII. TIPO DE SANCION:

Por lo expuesto, dado que se encuentra acreditada la falta imputada al procesado y considerando la sanción propuesta por el órgano instructor, corresponde aplicar la sanción de **AMONESTACIÓN ESCRITA** a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, en el marco de lo establecido en el inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil.

IX. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

Que, el Art. 94° de la Ley N° 30057 establece que: "(...). En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año;

Que cabe acotar que conforme al precedente administrativo se observancia obligatoria contenido en la Resolución se la Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (01)

año debe computarse hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento.

Que, en el presente caso, se aprecia que con la Resolución Gerencial General Regional N° 113-2026-GRJ/GGR, de fecha 10-04-2026, se resuelve Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del investigado, por la presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil y que con Constancia de Notificación de Resolución N° 278-2026-GRJ/SG, de fecha 13-04-2026, se notificó a la servidora civil: **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, por la presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil Estado "Las que señale la ley", y conforme a los fundamentos antes expuestos por lo que el presente caso a la fecha NO ha prescrito;

X. DERECHO Y OBLIGACIONES DEL SERVIR EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO

Que, se precisa los derechos y obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el exfuncionario tiene los siguientes derechos e impedimentos:

a) Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones.
b) El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.
c) Mientras dure dicho procedimiento no se le concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del artículo 153° del Reglamento mayores a cinco (05) días Hábiles.
d) En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la Republica no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.

GOBIERNO REGIONAL OAH JUNÍN

XI. SOBRE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS

Que, se precisa sobre el trámite de los recursos administrativos que el exfuncionario, puede acogerse, al no encontrarse conforme a lo resuelto por este órgano sancionador, deberá ser de conformidad al artículo 117° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil:

a) El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación, debiendo presentarlos ante la misma autoridad que impuso la sanción.

b) La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil, de presentar el recurso de apelación, este deberá cumplir con los requisitos

establecidos en el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado con el Decreto Supremo N° 008-2010-PCM y modificado con el Decreto Supremo N° 135-2013-2013-PCM, y por la segunda disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; asimismo deberá será acompañado del Formato N° 1, conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2017-SERVIR/SC "Disposiciones para el uso del Sistema de Casilla Electrónica del Tribunal del Servicio Civil" aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 085-2017-SERVIR/PE, en concordancia con el artículo 25° del mencionado Reglamento".

c) La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo anterior.

Que, por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER la sanción de **AMONESTACIÓN ESCRITA** a la servidora civil: **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA** en su condición de Directora del Archivo Regional del Gobierno Regional Junín, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER OFICIALIZAR LA SANCIÓN IMPUESTA a la servidora civil, mediante la comunicación del presente, acto resolutivo contenida en la presente resolución, sea notificada a la sub Dirección de Recursos Humanos para que sea ejecutada y a la Coordinación de Escalafón para el registro de la sanción en su LEGAJO PERSONAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 89° de la Ley N° 30057, concordante con el artículo 93°, numeral 93.1) ítem a) del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, concordante con el numeral 17.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a través de la Secretaria General del Gobierno Regional Junín, la presente resolución a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA**; en cumplimiento al artículo 20° del TOU de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole el plazo de (15) días hábiles; a fin de que presente los recursos administrativos que considere necesarios para su legítima defensa

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín, la presente resolución y todos sus antecedentes, así como los cargos de notificación debidamente diligenciada a la servidora civil **OLINDA ZENAIDA BALDEON ANTIPA**, para su custodia y archivo del expediente administrativo disciplinario.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Lic. Adm. Juan Joseph Chávez Sánchez
SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

C.c.
Archivo
STPAD/EQR

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
...General que suscribe, Certific...
...copia fiel de su original
...YO 03 NOV 2026
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)